

Los falsos diagnósticos y el porvenir nacional

Por Eduardo Posada Carbó

Nuestro país está muy lejos de estar en el centro de la atención mundial. Sin embargo, en parte por las trágicas dimensiones de la tragedia que se identifica con una crisis humanitaria, en parte por los esfuerzos diplomáticos para ‘internacionalizar la paz’, y también en parte por la ayuda norteamericana al Plan Colombia, existe hoy un número creciente de analistas extranjeros interesados en nuestros problemas.ⁱ El interés debe ser bienvenido. Pero, al mismo tiempo, el que tal interés venga acompañado con frecuencia por diagnósticos pobremente informados, y llenos de falsos estereotipos sobre nuestra realidad, debería ser motivo de gran preocupación.

Un ejemplo de dicha atención lo constituye la serie de ensayos y monografías sobre el conflicto colombiano, publicados por el Strategic Studies Institute del US Army War College, conjuntamente con el Dante B. Fascell North-South Center de la Universidad de Miami. Entre sus varias publicaciones, quisiera referirme en esta ocasión a dos de los sendos trabajos de los profesores del US Army War College, Gabriel Marcella y Max G. Manwaring: “The United States and Colombia: the journey from ambiguity to strategic clarity” (mayo de 2003), y “Nonstate actors in Colombia: threat and responses” (mayo de 2002).ⁱⁱ

Tanto Marcella como Manwaring reconocen la seria amenaza que para el país y la región representan los grupos criminales armados – guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Y ambos apoyan la ayuda militar norteamericana a Colombia. No obstante, para defender sus planteamientos acuden a explicaciones simplistas y erradas, ignoran las complejidades del sistema democrático, y formulan unas políticas cuyas eventuales implicaciones no son muy claras para el porvenir nacional. No es éste el lugar para examinar en detalle cada uno de los aspectos de sus ensayos. Me parece más bien relevante señalar tan sólo algunas de esas apreciaciones que, en mi sentir, distorsionan el origen y la naturaleza de los problemas colombianos. Y advertir cómo, de tales diagnósticos, es difícil elaborar políticas sólidas, consistentes y, por encima de todo, efectivas para fortalecer el Estado – en contradicción a lo que ellos mismos estarían proponiendo.

Marcella y Manwaring adoptan, sin mayores críticas, varios de los lugares comunes más arraigados sobre la realidad colombiana, dentro y fuera del país. Según

Marcella, seríamos una “nación fragmentada”; dominada históricamente por unas élites que han “preferido” una “autoridad central débil”; caracterizada por una cultura política que desprecia la ley, con sus raíces en el pasado colonial español; e identificada en el pasado reciente con el Frente Nacional – una “democracia ateniense controlada por unas pocas familias”, que marginalizó a los militares, generó corrupción, y debilitó la democracia al impedir la competencia política. Todas estas observaciones merecen una discusión más detenida que lo que permiten estas líneas. Sólo quiero llamar la atención sobre la repetida presencia de ideas tan difundidas que considero cuestionables. Va siendo hora, además, de revisar esas condenas absolutas del Frente Nacional que terminan justificando la existencia del conflicto armado.

Tanto Marcella como Manwaring utilizan de forma bastante ligera la noción de “legitimidad” – o su contraparte, “ilegitimidad” -, para explicar los problemas colombianos.ⁱⁱⁱ Ambos dudan de la “legitimidad” del Estado, condición que le otorgan a ratos equivocadamente a sus enemigos: Manwaring, por ejemplo, se refiere a la acumulación de “legitimidad” de la alianza “narco-insurgente-paramilitar”. ¿Es acaso legítimo el poder que ejercen las organizaciones criminales al intimidar a la población con la violencia de sus armas?

Manwaring además asevera que es “difícil darles crédito a las elecciones colombianas como “democráticas” o “libres”, con lo que pone en duda los títulos que tienen para gobernar los gobernantes colombianos.^{iv} Marcella, por su parte, elogia el análisis del exembajador David C. Jordán que categoriza a Colombia como una “pseudodemocracia”, en proceso, junto con otros países, de narcoestatización.^v Ambos dudan de la legitimidad del Estado por sus altos niveles de corrupción: dos terceras partes de los congresistas – es decir, la enorme mayoría en la institución – aparecen descalificados en sus respectivos análisis por corruptos.

Sería ingenuo negar que existen problemas de corrupción en Colombia. Tampoco estaría sugiriendo que el Estado no tiene problemas de legitimidad. Los que me parecen cuestionables son los términos casi absolutos en que se plantean los problemas. Hay pocos matices. Escasean aún más los reconocimientos a la estructura democrática y constitucional del poder en Colombia. Algo similar sucede con las referencias generalizadas a la “debilidad” y a la “ausencia del Estado”.^{vi} O al descuido de los temas militares o de seguridad por parte de las autoridades civiles. En todas estas áreas hay problemas, y serios. Pero un análisis más ponderado de la realidad colombiana tendría que reconocer un cuadro más dinámico y complejo.

Marcella alcanza a advertir que en Colombia no estamos frente a un “estado fracasado”, ni ante una “guerra civil”. Sin embargo, en la descripción que ofrece de la debilidad del Estado, lo despoja con frecuencia de legitimidad y lo retrata sin efectividad alguna, ni soberanía, hasta el punto de convertirlo en un socio poco confiable del orden inter-estatal que surgió de Westfalia.

Hay muchos aspectos de su análisis que comparto. Por encima de todo, estoy de acuerdo en la prioridad que debe recibir el tema de la seguridad en la agenda pública. Estoy también de acuerdo en que los civiles deben responsabilizarse más del tema militar, elemento indispensable para cualquier solución del conflicto. Y estoy de acuerdo en que, para superar la ambigüedad anterior de la política norteamericana hacia Colombia, es necesario incorporar el fortalecimiento del Estado como parte central de una clara estrategia. Sin embargo, defender una política de apoyo al Estado colombiano sobre la base de la ilegitimidad de sus autoridades, su corrupción generalizada, las debilidades democráticas, la falta de compromiso colectivo con el bien público, y la casi absoluta ineffectividad del accionar estatal me parece más bien una pobre defensa que me remite al dicho popular – “¡Con esos amigos, para qué enemigos!”.

Importa advertir que en ese desprecio – explícito e implícito – por las complejidades de la estructura del poder en Colombia, Marcella y Mainwaring comparten el diagnóstico de muchos de quienes se oponen a la ayuda militar de los Estados Unidos a Colombia.^{vii} Ni unos ni otros les dan mayores créditos a las instituciones democráticas colombianas. Unos y otros tienen una concepción bastante simplista y despectiva de las clases dirigentes en la historia del país. Tanto los unos como los otros defienden tesis en apariencia contrarias que, sin embargo, socavan ambas la soberanía nacional.

Desconozco si, desde el seno del Estado, se le hace un seguimiento sistemático a los tantos ensayos, artículos y libros que sobre el conflicto colombiano se están publicando hoy en el extranjero, en números cada vez más significativos. Desconozco más aún si tales publicaciones han recibido respuestas oficiales. A juzgar por el debate en la prensa, mi impresión es que, a pesar de algunas contadas excepciones, la tendencia general es a ignorarlos – ya porque no se les conoce, ya porque no se les presta mayor atención. El resultado de esta actitud se refleja, por lo menos, en el arraigo de los falsos estereotipos y errados diagnósticos. Y nada bueno puede esperarse de una comunidad internacional mal informada, a la que además

hemos invitado a inmiscuirse de forma cada vez más activa en la solución de nuestros problemas.

Referencias bibliográficas

ⁱ Véase Pilar Gaitán, Rodrigo Pardo García-Peña y Juan Manuel Osorio, *Comunidad internacional, conflicto armado y perspectivas de paz en Colombia* (Bogotá: Libros de Cambio, Alfaomega y Fundación Ideas para la Paz, 2002). Véanse también los documentos sobre el tema en www.ideaspaz.org

ⁱⁱ Las monografías pueden consultarse en <http://www.carlisle.army.mil/usassi/welcome.htm>

ⁱⁱⁱ Véase mi ensayo “La ‘ilegitimidad’ del Estado en Colombia: Sobre los abusos de un concepto”, próximo a publicarse en el libro editado por Alfonso Monsalve en la Universidad de Antioquia. Véanse también los artículos sobre este tema publicados en www.ideaspaz.org

^{iv} Otro documento, publicado también por el SSI, y escrito por Colonel Joseph Núñez, se refiere a la “soberanía y democracia superficiales, basadas en acuerdos entre élites acomodadas, sin interés en la mayoría del pueblo”, véase su “Fighting the Hobessian trinity in Colombia: a new strategy for peace” (Abril de 2001).

^v Jordan es el autor de *Drug policy: dirty money and democracies* (University of Oklahoma Press, 1999).

^{vi} Sobre la ausencia y debilidad del Estado, véanse las observaciones de Malcolm Deas en sus “Siete tesis disidentes”, *Cambio*, junio 26 de 2000. Véase también mi ensayo “Colombian institutions. On the paradox of weakness”, en *ReVista. Harvard Review of Latin America*, Spring 2003.

^{vii} Véanse por ejemplo, los sendos ensayos del profesor de la universidad de Princeton, Jeremy Adelman, “Andean impasses”, *New Left Review*, Nov-Dic 2002; y de Julia Sweig en la revista *Foreign Affairs*, Sept-Oct 2002.